

NUE 1-ADP-2019 (CE)

contra la Policía Nacional Civil (PNC)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las trece horas con cuarenta y dos minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

A. Descripción del Caso

I. El apelante [REDACTED], presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Policía Nacional Civil (PNC), solicitud de datos personales conforme al Art. 36 letra "d" de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), relativa a: "suprimir definitivamente su antecedente delincuencia, en su solvencia de antecedentes policiales", fue condenado por el delito de: "robo", por el cual se le extinguió la responsabilidad penal y fue rehabilitado de sus derechos de ciudadano; la solvencia de antecedentes policiales la solicitó para trámites de empleo.

En relación con ello, el oficial de información de la PNC resolvió: "(...) en atención a todo lo antes expuesto, se considera que no es procedente acceder a lo solicitado (...), esto en razón, que a partir de dichos antecedentes y del contexto de los mismos, se infiere en la existencia de un peligro real e inminente en cuanto a que el solicitante podría utilizar dichos documentos para sorprender a las instituciones Públicas encargadas de la autorización de permisos, licencias, prerrogativas o ingresos a entidades Estatales (...) lo cual iría en detrimento de la seguridad pública, el mantenimiento del orden y la paz pública y consecuentemente, en perjuicio de derechos de terceras personas".

II. El apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto conforme al Art. 38 de la LAIP, el cual fue admitido, designándose al Comisionado Hernán Alexander Gómez Rodríguez, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. Sin embargo, al finalizar su periodo fue reasignado a la Comisionada Claudia Liduvina Escobar Campos.



El oficial de información, no remitió el expediente administrativo relacionado con el presente caso ni el titular de la PNC rindió el informe justificativo conforme a lo establecido en el Art. 88 de la LAIP.

B. Análisis del Caso.

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) fundamento del procedimiento reducido a una cuestión de derecho; (II) Una breve referencia al derecho a la protección de datos personales, y en específico al derecho de cancelación y el principio de confidencialidad; (III) Consideraciones sobre los antecedentes policiales que registran las personas, como límite para acceder a un empleo; (IV) Se analizará la procedencia de la cancelación del dato personal negativo del apelante.

I. La Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia definitiva del proceso de legalidad, del día 28 de enero de 2019, de referencia 408-2016; señala que *“en el ámbito jurisdiccional los procesos son clasificados en procesos donde la controversia estriba en hechos alegados, y otros, en interpretación o aplicación del derecho. En el primer caso, el debate judicial gira en torno a aspectos fácticos que se alegan han acontecido y que las partes argumentan ocurrieron en forma distinta; en la segunda clasificación, no hay controversia sobre los sucesos, sino sobre la aplicación e interpretación de la norma a dichos acontecimientos, en estos casos el juzgador se limita a la interpretación y aplicación de la consecuencia jurídica, pues no hay debate respecto a la manera en que ocurrieron los hechos”*.

En ese mismo sentido, en jurisprudencia contencioso administrativa¹, se acompaña el criterio seguido por la Administración pública, que cuando no se trata de controvertir hechos, sino de la aplicación del derecho al caso en particular, resulta aplicable lo establecido en el artículo 309 del Código Procesal Civil y Mercantil, normativa supletoria aplicable de conformidad con el artículo 102 de la LAIP referido a que *“...si hubiese conformidad sobre todos los hechos y el proceso queda reducido a una cuestión de derecho, se pondrá fin a la audiencia preparatoria y se abrirá el plazo para dictar sentencia”*.

¹ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 28 de enero de 2019, en el proceso de legalidad de referencia 408-2016.

Por tanto, la Sala de lo Contencioso Administrativo, manifestó que la omisión de la audiencia establecida en el art. 91 de la LAIP, en asuntos de mero derecho, no produce la vulneración del debido proceso en sus manifestaciones de los derechos de audiencia, defensa, congruencia y ausencia de motivación, de dicho artículo, y el 102 de la LAIP.

En ese orden de ideas, este Instituto se ve facultado para someter el presente procedimiento de apelación, en una cuestión de mero derecho, con base a la aplicación de normas y principios de la LAIP, así como los derechos que asisten al titular de datos personales, de conformidad con el Art. 102 de la LAIP y Art. 309 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), por lo que se procedió a dar por finalizada la instrucción del procedimiento a efecto de emitir la resolución correspondiente al caso, con base a los principios de economía procesal, disponibilidad, prontitud y sencillez (Art. 4 letras "b", "c" y "f" de la LAIP).

II. De acuerdo a la resolución definitiva emitida por este Instituto en fecha 9 de marzo de 2018, en el procedimiento de imposición de sanciones de referencia NUE 3-DDP-2017, por dato personal se entiende toda aquella información relativa a un individuo identificado o identificable que, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Asimismo, señalan aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su domicilio, teléfono, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros².

A. Asimismo, el Art. 31 de la LAIP establece que el derecho a la protección de datos personales, consiste en que: ***"Toda persona, directamente o a través de su representante, tendrá derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer los destinatarios cuando la información sea transmitidas, permitiéndole conocer las razones que motivaron su petición, en los términos de esta ley. El acceso a los datos personales es exclusivo de su titular o su representante"*** (la negrita es nuestra).

En ese orden de ideas, la Sala de lo Constitucional en la sentencia definitiva de amparo del día 4 de marzo de 2012 de referencia 934-2007, reconoció que la protección de los datos

² Concepto retomado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos (INAI), en su resolución de fecha 1 de febrero de 2017, de referencia RRA 3995/16.



personales, es el medio por el cual se salvaguardan los objetivos de la faceta material del derecho a la autodeterminación informativa, por un conjunto de derechos subjetivos, deberes, principios, procedimientos, instituciones y reglas objetivas, teniendo este su fundamento en la seguridad jurídica Art. 2 de la Constitución de la República (Cn); asimismo, estableció que la protección de este derecho, pretende satisfacer la necesidad de las personas de preservar su identidad ante la revelación y el uso de los datos que les conciernen, y que este no puede limitarse a determinado tipo de datos —sensibles o íntimos—, lo decisivo es la utilidad y el tipo de procesamiento que de los mismos se haga, pues se requiere conocer el contexto en que se utiliza o se pretenda hacer uso.

Por ello, el grado de sensibilidad o intimidad del dato personal ya no depende de si afecta o no la esfera íntima o privada de la persona; hace falta conocer la relación de utilización de un dato para poder determinar sus implicaciones con el individuo; es decir, determinar la verdadera finalidad y qué posibilidades de interconexión y de utilización existen; solo así se podrá descifrar la licitud de las restricciones al derecho a la autodeterminación informativa o protección de datos personales.

Este derecho también se encuentra reconocido en los tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico salvadoreño, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 17) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 11), al interpretar estas disposiciones, los Organismos Internacionales han destacado la noción de las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos.

B. Por otro lado, es pertinente señalar que dentro de esos derechos subjetivos que componen el derecho a la protección de datos personales, se encuentra el derecho de cancelación o supresión (Art. 36 letra “d” de la LAIP), que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, es la facultad que se otorga a un individuo para que solicite la eliminación de sus datos de carácter personal de las bases que tenga un ente determinado, *“por la falta de relevancia y actualidad de la información para los fines que fueron recabados o, simplemente, por el propósito de permitir*

al titular que recupere la disponibilidad sobre cualquier faceta de su personalidad y de su datos íntimos o estrictamente privados”³.

En ese contexto, como evolución al derecho de cancelación, se encuentra anclado el denominado “Derecho al Olvido” o “Derecho a la Caducidad del Dato Negativo Verdadero del Pasado”, el cual se define como el derecho que tiene el titular de un dato personal a **borrar, bloquear o suprimir esa información personal**, que de alguna manera afecta el **libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales**, como el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, o que podría considerarse como **información obsoleta**, pues carece de sentido que se tenga acceso a ella **después de mucho tiempo**, y ya no sirve a los **fin**es para los que fue recabada (principio de finalidad).

C. Ahora bien, en la sentencia definitiva de la Sala de lo Constitucional del 8 marzo de 2013, en el proceso de Inconstitucionalidad 58-2007, se aclaró que el derecho a la autodeterminación informativa (o protección de datos personales), -que comporta diferentes facultades de controlar sobre el uso de la información personal que le atañe, tanto en su recolección como en su tratamiento, conservación y transmisión-, no es ilimitado. Las personas individuales o colectivas carecen de derechos fundamentales absolutos sobre sus datos. Esta es la razón por la que el individuo debe tolerar límites a ese derecho, en razón de un interés general.

Del mismo modo, se acotó que las restricciones o limitaciones pueden encontrarse justificadas en la finalidad que persigue la recolección y administración de los datos personales, la cual debe ser legítima (constitucional o legal), explícita y determinada. Para ello el legislador debe tener en cuenta no solo el principio de proporcionalidad, sino también el derecho general del ciudadano a la libertad frente al Estado, que solo puede ser restringido por el poder público cuando sea indispensable para la protección del interés general. Y es que la fuerza obligatoria del derecho constitucional se manifiesta, en primer lugar, en la prohibición de emanar normas contrarias a la Constitución.

Por lo que, en cada caso en concreto, se debe dejar claro el alcance del límite a derechos, y no quedando sujetos a fórmulas interpretativas que restrinjan un derecho más allá del alcance planteado por el legislador.

³ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional, en el Amparo del día cuatro de marzo de 2012 de referencia 934-2007.



D. Es importante señalar que el derecho a la protección de los datos personales se encuentra informado por una serie de principios, en el que resalta para el caso en concreto; el principio de confidencialidad (Art. 36 letra “d” de la LAIP).

Este se define como la obligación del responsable del registro de las bases de datos, de establecer controles o mecanismos para quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales a fin de que mantengan y respeten el secreto de los mismos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular de los datos personales⁴.

En adición a este principio, se encuentran algunos métodos preventivos para salvaguardar la identidad, circunstancias o situaciones en las que una persona individual o jurídica se encuentra inmersa, por ejemplo, las reglas de anonimización, las cuales funcionan para facilitar el procesamiento de datos personales, pero a la vez para proteger al individuo de un seguimiento de sus datos mediante la asignación automática de características que lo permitan individualizar.

También, se encuentra el bloqueo de los datos personales, que es el método que tiene como fin impedir su ulterior tratamiento o disposición, produciendo efectos similares al borrado físico de los mismos; esto procede cuando existe una imposibilidad técnica como por causa del procedimiento o soporte utilizado, también cuando una norma legal ordena la conservación de los datos personales y otorga únicamente su disposición a las autoridades públicas conforme a sus atribuciones y competencias, impidiendo que terceros tengan acceso a esos datos, garantizando la confidencialidad de los mismos, salvo que sean necesarios para garantizar razones de seguridad nacional, seguridad pública, orden público, salud pública o salvaguarda de derechos y libertades de terceros.

III. Establecido lo anterior, es pertinente mencionar que los antecedentes policiales son datos personales que derivan de los hechos tipificados en el vigente Código Penal u otras normas que establecen delitos o faltas, o de aquellos otros de carácter administrativo que han dado lugar por parte de la autoridad policial a la instrucción de diligencias y su posterior remisión a las autoridades judiciales o administrativas. Esos datos personales son registrados en soporte físico y electrónico sin el consentimiento de la persona afectada y susceptible de tratamiento.

⁴ Disposición 23, de los “Estándares de Protección de Datos Personales” emitidos por la Red Iberoamérica de Protección de Datos, en Santiago de Chile, Junio 2017.

Sin embargo, dichos datos son almacenados por la PNC, a raíz de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Orgánica de la referida Institución, el cual en su artículo 23 establece: “La PNC, para efecto de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica, podrá llevar un registro de antecedentes de las personas que hayan sido detenidas por atribuírseles la comisión de delitos o faltas. Asimismo, extender constancias o certificaciones de antecedentes policiales a las personas que lo soliciten”.

De dicha disposición podemos inferir que el registro de antecedentes policiales, tiene dos finalidades específicas: 1) la de servir para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la PNC; y, 2) la de servir de soporte para la emisión de certificaciones o constancias de antecedentes a las personas que lo soliciten.

En el primero de los casos, el artículo 23 de la Ley Orgánica de la PNC, establece una serie de funciones que debe cumplir la PNC, las cuales en su mayoría están relacionadas con proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, mantener la paz, el orden, seguridad pública, prevenir la comisión de delitos, garantizar el cumplimiento de las leyes, acopiar y ordenar datos para la elaboración de una estadística nacional, entre otras.

En el segundo de los casos, para la emisión de certificaciones de antecedentes policiales de las personas que lo soliciten. En este supuesto es pertinente mencionar que en nuestro país las personas solicitan este documento, como requisito para adquirir alguna prerrogativa u obtener alguna concesión de cualquier tipo y además, cuando es requerido por otra Institución pública o de índole privada.

De ahí que, en la actualidad es una práctica constante que los empleadores de cualquier naturaleza (público o privado) soliciten el referido documento, como requisito para contratar a las personas en cualquier puesto, justificándolo en el hecho de que la persona que contratará no tiene procedimientos penales abiertos en su contra, orden de captura, o pueda tener algún tipo de antecedente que pueda poner en peligro bienes jurídicos de la empresa o Institución. Es importante señalar que dicho requisito (la presentación de solvencia policial) para acceder a un empleo, no se encuentra normado en los cuerpos legales que regulan la materia, como el Código de Trabajo y la Ley del Servicio Civil, esto crea un estigma social, y le limita las oportunidades de empleo a estas personas, no permitiendo su reinserción social plena.



Asimismo, cabe mencionar que una persona posee antecedentes policiales desde el momento en que es detenida por atribuírsele la comisión de un hecho delictivo; sin embargo, la Directiva para Normar la Emisión de Solvencia de Antecedentes Policiales y Constancia de Antecedentes Policiales, emitida por el Director General de la PNC en julio de 2017, respecto a la emisión de dichos documentos establece que estos serán emitidos haciendo constar que la persona solicitante carece de antecedentes policiales, vigentes a la fecha de su solicitud siempre y cuando se encuentre en uno de los supuestos señalados en la norma 3, de la normativa en referencia.

Por otro lado, también dispone que los documentos serán emitidos haciendo constar el delito y su estado, en el caso de los delitos graves a que se refiere el Art. 18 del Código Penal, cuando la extinción de la acción penal, haya sido por el cumplimiento de la pena; es decir, cuando hubiere sido condenada.

No obstante, la persona que posee antecedentes policiales por la comisión de cualquier tipo de delito, que ha cumplido la pena impuesta, y que fueron rehabilitados en sus derechos de ciudadano por la autoridad competente —Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena—, tienen restablecidos sus derechos enunciados en la Constitución (Art. 75 inciso final de la Constitución).

Y es que, dada la anterior afirmación es menester traer a colación lo dispuesto en el artículo 27 inciso tercero de la Constitución de la República, en donde se regula la obligación del Estado, de organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a las personas que han cometido un delito, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y prevención de delitos; para el cumplimiento de tal obligación se decretó la Ley Penitenciaria, la cual en su artículo 6 regula el “Principio de Judicialización”, en virtud del cual toda pena se ejecutará bajo el estricto control del Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, y la Cámara respectiva, en su caso, quienes harán efectivas las decisiones de la sentencia condenatoria. El juez también controlará el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario.

Asimismo, es atribución del citado Juez, declarar la extinción de la pena en los casos que proceda conforme al Código Penal y su norma procesal, tramitar y resolver el incidente de rehabilitación de los condenados por delito, entre otras; de tal manera, que determinado el cumplimiento de ciertos parámetros establecidos en la leyes penitenciarias, rehabilita al

ciudadano en sus derechos; es decir, que dicha decisión no es automática, sino que el juez debe comprobar ciertos requisitos para decretarlo. De esa forma, el ciudadano goza nuevamente de todos sus derechos.

Por otro lado, el **principio de finalidad** establece que los datos personales objeto de tratamiento, no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. Es por ello, que los **datos deberán ser eliminados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubieren sido recolectados.**

Así, con base en lo anterior, los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando **no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.** A esos efectos, este Instituto sostiene que se debe de considerar la necesidad de mantener los datos hasta la consecución de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial absolutoria, el indulto, sobreseimientos definitivos, la rehabilitación y la prescripción de responsabilidad.

Es preciso señalar, que la cancelación no supone necesariamente el borrado en todo caso de los datos previamente sometidos a tratamiento. En tal sentido, la cancelación dará lugar al **bloqueo de los datos** conservándose únicamente a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas. Cumpliendo el citado plazo deberá **procederse a la supresión.**

Asimismo, solo se podría denegar las peticiones de acceso, rectificación y cancelación en datos recogidos con fines policiales: en función de los peligros que pudieren derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.

B. De conformidad con el Art. 36 letra "d" de la LAIP, los titulares de los datos podrán solicitar la rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de la información que le concierna, según sea el caso, y **toda vez que el procedimiento para tales modificaciones no esté regulado por una ley especial.**

Por lo que, siendo una o varias las bases de datos que se utilizan para establecer los antecedentes policiales, cuyo responsable es la PNC (ente obligado a la LAIP), las personas que



los posean, hayan cumplido la pena impuesta y además gocen de la rehabilitación de sus derechos de ciudadano por la autoridad competente —jueces de vigilancia penitenciaria-, o la acción penal les haya sido extinta por cualquier otra modalidad diferente al cumplimiento de una pena de prisión. Podrán solicitar, ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), mediante una solicitud presentada ante el oficial de información de esa entidad junto con la documentación necesaria según el derecho de que se trate.

En ese sentido, este Instituto tiene la competencia legal para conocer y determinar conforme al Art. 29, 83 letra “a” y 96 letra “d” de la LAIP, sobre lo peticionado por el apelante. Asimismo, posee la competencia de velar por la correcta interpretación y aplicación de la LAIP conforme a su Art. 58 letra “a”; además, interpretar las normas a la luz de la Constitución, actitud que se exige no sólo para entes jurisdiccionales, sino de manera general para todo funcionario de acuerdo a la jurisprudencia contenciosa administrativa⁵ y en aplicación al Art. 235 de la Cn.

IV. Una vez aclarado lo anterior, es preciso analizar los elementos vertidos en el presente procedimiento, para determinar la procedencia de la cancelación del dato personal negativo del apelante en el registro de antecedentes policiales.

En el expediente administrativo remitido a este Instituto, durante la tramitación del presente procedimiento consta copia simple de solvencia de antecedentes policiales emitida por la Unidad de Registro y Antecedentes PNC, a nombre de [REDACTED], en la cual refleja que fue condenado por el delito de robo. Sin embargo, también se encuentra incorporada copia simple de constancia emitida por el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Tecla, en la cual se establece que dicha sede declaró la extinción penal, al apelante por la comisión del delito de robo y consecuentemente le rehabilitó en sus derechos de ciudadano.

En ese sentido, con la documentación antes relacionada ha quedado probado en el presente procedimiento lo siguiente: (i) Que el apelante fue condenado a 16 años de prisión por el Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque, por la comisión del delito de robo (ii) Que habiendo cumplido la pena impuesta el 4 de diciembre de 2010 y rehabilitado en sus derechos de ciudadano por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Tecla, el 13 de mayo

⁵ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo el 27 de junio de 2000, en el proceso de legalidad de referencia 157-M-99.

de 2011 y (iii) Que la solicitud de cancelación del antecedente delincriminal del apelante tiene como finalidad obtener un empleo.

De lo anterior, se puede resaltar que el señor [REDACTED], fue condenado por el delito de robo a 16 años de prisión, pena que cumplió el 4 de diciembre de 2010; es decir, que hace más de 8 años se le extinguió la responsabilidad penal y posteriormente se le rehabilitó en sus derechos de ciudadano; además, la PNC no probó durante este procedimiento, un peligro específico y cierto que el apelante pueda cometer a la seguridad pública o nacional del país.

Aunado a ello, es pertinente ordenar la supresión del dato negativo del apelante, en su solvencia de antecedentes policiales tomando en cuenta parámetros como: 1) el tiempo que lleva rehabilitado; 2) la no reincidencia en la comisión de conductas tipificadas en el Código Penal y 3) la finalidad con la cual fue requerido el documento.

Esto es así debido a que además, se comprobó que el apelante, solicitó su solvencia de antecedentes policiales con la finalidad de ser presentada ante un tercero, para trámites de empleo; es decir que, esta será utilizada para el ejercicio del derecho al trabajo el cual se encuentra dentro de los denominados derechos sociales, los cuales son auténticos derechos fundamentales, y constituyen al igual que los de tipo individual, facultades o poderes de actuación reconocidos a la persona humana como consecuencia de exigencias ético-jurídicas, derivadas de su dignidad, libertad y su igualdad inherente⁶.

Por lo que, con la consignación del dato negativo del apelante, se está limitando su derecho al trabajo y dado que solamente se pueden limitar derechos a través de ley en sentido formal y para el caso el Código de Trabajo o la Ley del Servicio Civil, no establece que para la obtención de un empleo la persona debe carecer de antecedentes policiales.

Es preciso mencionar que la Directiva emitida por la PNC, para la Emisión de Solvencias o Certificaciones, en los casos de personas condenadas, bajo los parámetros del Art. 18 del Código Penal, al momento de establecer que siempre se les consignará para cualquier finalidad, sin limitar su tiempo, está creando en cierta forma una pena perpetua prohibida por la Constitución en el Art. 27 inc. 2º de la Cu., y no permite la reinserción social que también

⁶ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional, el 10 de noviembre de 2017, en el proceso de inconstitucionalidad de referencia 8-2015/16-2015/89-2016.



proclama la Carta Magna, por lo que se recomienda que debe actualizarse bajo los parámetros establecidos en esta resolución.

En consecuencia, existiendo evidencia suficiente que al apelante, le fue extinguida la pena y rehabilitados sus derechos de ciudadano de conformidad con el Art. 110 del Código Penal, es procedente ordenar a la PNC que por el principio de confidencialidad de la protección de datos personales previsto en el Art. 36 letra "d" de la LAIP, bloquee el antecedente negativo del apelante en la emisión de solvencias o certificaciones para motivos de trabajo, dejando en las bases de la PNC, dicho dato para conocimiento de jueces, fiscales, perfilamiento criminal y para la emisión de certificaciones para cumplir con un requisito que por ley en sentido formal se establezca.

Finalmente, es pertinente modificar la resolución del oficial de información de la PNC, en el sentido que proceda al bloqueo y confidencialidad del dato negativo del apelante por el delito robo, debido a que la petición del apelante sobre la solvencia de antecedentes policiales es para trámites de empleo.

C. Decisión del Caso.

a) **Modificar** la resolución emitida por el oficial de información de la **Policía Nacional Civil (PNC)**, el 17 de diciembre de 2018, por las razones mencionadas.

b) **Ordenar** al titular de la PNC, que en el plazo de **ocho días hábiles** contados a partir del siguiente a la notificación, proceda a bloquear el antecedente policial negativo del apelante [REDACTED] en la emisión de solvencias o certificaciones para motivos de trabajo, dejándose dicho dato únicamente en las bases de la PNC para conocimiento de Jueces, Fiscales, perfilamiento criminal y para la emisión de certificaciones para cumplir con un requisito que por ley en sentido formal se establezca.

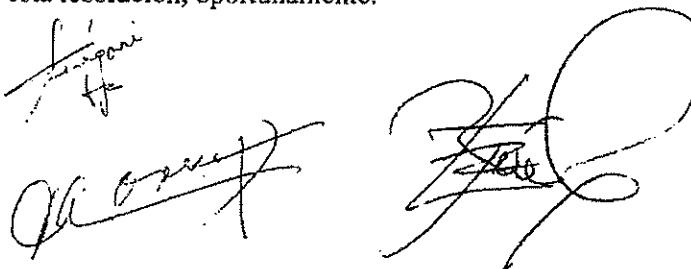
c) **Ordenar** a la PNC, que en el plazo de **tres días hábiles** contados a partir del día de finalización del plazo señalado en la letra b) de esta resolución, entregue al señor [REDACTED], constancia de bloqueo de los antecedentes que registra por el delito de robo, en virtud del principio de confidencialidad.

d) Ordenar a la PNC, que en el plazo de veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento, que incluya algún registro en el que conste la documentación entregada al apelante así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv.

e) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para que verifique su ejecución.

f) Publíquese esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.



PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.
CT/JC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los once días del mes de octubre de dos mil diecinueve.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



